Las partes deben respetar las normas humanitarias con pulcritud, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto.

Las conversaciones de paz entre las delegaciones de las FARC y el Gobierno colombiano no son un lecho de rosas. Por el contrario, las espinas acumuladas durante casi medio siglo de conflicto armado interno se mantienen por la decisión de ambas partes de negociar en medio de las hostilidades y sin interrumpir las atroces consecuencias humanitarias de los actos bélicos. En tanto es improbable que un cese al fuego bilateral sea políticamente posible, las dos partes deben incrementar sus esfuerzos por aliviar la suerte de la población civil y respetar escrupulosamente las normas humanitarias. No se requiere ni acuerdo humanitario ni regularización de la guerra para respetar normas que son de obligatorio cumplimiento.

Las FARC reivindican su “derecho” a “retener” a miembros de la fuerza pública que caigan en su poder, indicando que ello no va en contravía de su decisión de terminar con el secuestro extorsivo. Más allá del examen jurídico-formal de dicha pretensión, la gran mayoría de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional rechazan vivamente lo que se consideran un secuestro, trayendo de vuelta los traumas del prologado cautiverio de civiles, policías y militares en las selvas colombianas. Las FARC deben entender mejor que el grado de tolerancia a sus acciones es muy bajo en la sociedad colombiana, de la que ahora necesita apoyo para legitimar los acuerdos a los que llegue con el gobierno en La Habana. Las FARC no pueden seguir hablando únicamente a sus militantes y simpatizantes.

Como Crisis Group lo dijo en su último informe (“Colombia: ¿paz al fin?), este proceso de paz está amenazado no solo ni principalmente por la incapacidad de las partes de forjar un acuerdo, sino además por personas y organizaciones interesadas en que el proceso de paz no llegue a ninguna parte, sea por razones políticas, económicas o por simple convencimiento. El escepticismo alimenta a estos sectores. Basta un secuestro, un carro-bomba o un asesinato cruel por parte de la FARC, para que el acuerdo de paz resulte inviable, como profecía autocumplida.

Las partes deben respetar las normas humanitarias con pulcritud, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. Atacar instalaciones civiles, como escuelas, no solo viola normas humanitarias sino que socava la escasa confianza de esa población en el propio proceso de paz. Cualquier abuso, sea militar o guerrillero, convencerá a los pobladores de zonas del Caquetá, Putumayo, Nariño o del Catatumbo, que esta negociación no se conduce en beneficio de quienes sufren

la guerra, sino solo en interés de las partes representadas en Cuba. Hay que evitar que el proceso pierda esa legitimidad en el camino.

Las obligaciones humanitarias son claras, pero hace falta más voluntad y esfuerzo para respetarlas y garantizarlas. Se requieren decisiones prontas y eficaces para contribuir a la identificación de la suerte de los desaparecidos, iniciar acciones para el desminado de zonas no militares, proscribir en la práctica el reclutamiento de niños – incluyendo la liberación/desmovilización inmediata de los menores entre 14 y 18 años -y dar claras y precisas instrucciones para que no se ponga en riesgo instalaciones civiles.

Por ejemplo, no basta con anunciar el término del secuestro. Hay muchas familias que esperan noticias de la suerte de quienes estuvieron en poder de la guerrilla y cuyo paradero se desconoce. Las FARC podrían contribuir de manera directa a que esas familias y las autoridades judiciales identifiquen el lugar en donde están los restos de militares, policías o civiles, y le den apropiada sepultura. De igual manera, el Estado debe redoblar sus esfuerzos para responder por las desapariciones causadas por los miembros de la fuerza pública.

Ambas partes acordaron mantener la mesa de La Habana aislada y no contaminada con el inevitable impacto negativo de la guerra en Colombia. Sabían que este tipo de negociación requería asumir el costo de la impopularidad y la presión social por un conflicto que sigue dejando huérfanos y viudas. La coherencia en esta negociación es clave: llevar a La Habana la discusión sobre los avatares de la guerra puede ser fatal para la confianza básica entre quienes tienen que pasar meses enteros escuchándose mutuamente y buscando puntos comunes.

El presidente Juan Manuel Santos y el comandante militar de FARC, Timochenko, han reiterado que nadie piensa levantarse de la mesa y que se esta avanzando. La discusión sobre el primer tema, desarrollo rural, entra en propuestas más concretas. Sin embargo, los temas más complejos están en la agenda futura e inmediata del proceso: justicia transicional, narcotráfico y participación política. El éxito en la negociación de estos temas dependerá de la confianza entre las partes, pero también de la confianza de los colombianos y colombianas en el proceso, especialmente de aquellos que sufren directamente las consecuencias de una guerra que debería terminar definitivamente.

*Director Latin America and the Caribbean Program International Crisis Group

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-importancia-cumplir-normas-humanitarias-durante-proceso-paz/334767-3